30 de enero de 1998

Proceso de
Inconstitucionalidad.
(Demanda).

Concepto. Propuesta por el Licdo. Juan Materno Vásquez, en su propio nombre y representación, en contra del Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997.

Señor Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Concurrimos ante el Despacho a su cargo, con el respeto que nos distingue, con la finalidad de dejar consignado nuestro criterio, relativo a la Demanda de Inconstitucionalidad, planteada por el Licdo. Juan Materno Vásquez, en contra del Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997.

Fundamenta nuestra intervención, el artículo 2554 del Código Judicial, cónsono con lo dispuesto en el artículo 248, numeral 6, del Código Judicial.

I. El acto que se acusa de inconstitucional.

El demandante requiere de Vuestra Sala, que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ley N°8 de 1997, por medio del cual se modifica el artículo 46 del Decreto de Gabinete N°252 de 30 de diciembre de 1971 (Código de Trabajo), cuyo texto completo se visualiza en las fojas 1, 1 vta. y 2 del expediente judicial.

El Decreto Ley --en referencia-- reproduce el texto del artículo 46, el cual señala los días de descanso obligatorio, por fiesta o duelo nacional, entre los que se incluyen los siguientes: el 1° y 9 de enero, el martes de carnaval, el Viernes Santo, el 1° de mayo, el 3, 10 y 28 de noviembre, el 8 y 25 de diciembre, y el día que tome posesión el Presidente electo de la República.

Dicho Decreto Ley añade, al texto del artículo 46, lo siguiente: ¿Para los efectos del descanso obligatorio correspondiente a los días 9 de enero, 1° de mayo, 10 y 28 de noviembre y 8 de diciembre, cuando éstos coincidan con un día martes o miércoles, se transferirá dicho descanso al día lunes anterior a la fecha. Cuando coincida con un día jueves o viernes, el descanso obligatorio se transferirá al lunes siguiente... Cuando el día de fiesta o duelo nacional coincida con un lunes, el descanso se disfrutará ese mismo día.¿

Aunado a lo anterior, se faculta al Órgano Ejecutivo para que decrete, con la autorización del Consejo de Gabinete, la transferencia del descanso obligatorio de cualesquiera de los otros días contemplados en este artículo, para el lunes anterior o posterior a la fecha del día de fiesta o duelo nacional.

II. Las normas constitucionales que se dicen vulneradas, y el concepto en que se consideran infringidas, son las siguientes:

¿Artículo 19: No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.¿

El artículo 19 de la Constitución Política se considera vulnerado directamente, por comisión, porque --a juicio de la parte actora-- las modificaciones introducidas al artículo 46 del Decreto de Gabinete N°252 de 30 de diciembre de 1971, representan una situación de fuero o privilegio para los servidores públicos porque, cuando uno de los

días conmemorativos de los que allí se disponen coincide con un día viernes, el mismo se traslada al día lunes con la finalidad de promover el turismo interno, por lo que los funcionarios del sector público son los únicos que pueden disfrutar de esa prerrogativa, por ser el único sector de los asalariados cuya jornada de trabajo semanal es de lunes a viernes.

¿Artículo 20: Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales.¿

El demandante conceptúa que el artículo 20 de la Carta Magna ha sido vulnerado, por el acto acusado de inconstitucional, porque se desconoció el contenido del precepto constitucional que dispone la igualdad de los panameños ante la Ley, sin excepción, al excluir a los trabajadores particulares del disfrute del llamado ¿puente turístico¿, por el hecho que a ese sector le corresponde laborar los días sábado, por ser su jornada laboral, desde el día lunes, al día sábado.

¿Artículo 77: La cultura nacional está constituida por las manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas producidas por el hombre en Panamá a través de las épocas.

El Estado promoverá, desarrollará y custodiará este patrimonio cultural.¿

El Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997, se dice violatorio de la Carta Política, en forma directa, por comisión, por no darle la importancia que revisten las fechas siguientes fechas: el 10 de noviembre, el 28 de noviembre, el 9 de enero, el 8 de diciembre y el 1° de mayo, dejando de promover la cultura nacional.

¿Artículo 87: Todos tienen derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. El Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos.

La educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento y difusión y aplica sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la familia, al igual que la afirmación y fortalecimiento de la Nación panameña como comunidad cultural y política.

La educación es democrática y fundada en principios de solidaridad humana y justicia social.¿

Al consignar su inconformidad, el demandante indicó que el artículo 87 de la Constitución Política ha sido infringido por el Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997, directamente, por comisión, al disponer una forma de celebración de fechas patrióticas que es contraria al querer del constituyente, que la educación se basa, entre otros elementos estructurales, en la afirmación y fortalecimiento de la Nación Panameña como comunidad cultural y política.

¿Artículo 89: Se reconoce que es finalidad de la educación panameña fomentar en el estudiante una conciencia nacional basada en el conocimiento de la historia y los problemas de la patria.¿

El demandante considera que el artículo 89 del Estatuto Fundamental ha sido infringido, en forma clara y tajante, en forma directa, por comisión, al introducir como objetivo primordial que las efemérides patrias sean aprovechadas para el fomento del turismo interno, es decir, para un fin comercial, en lugar de fomentar en el estudiante una conciencia nacional, basada en el conocimiento de la historia y los problemas de la patria.

¿PREÁMBULO.

Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de Panamá.¿

El Preámbulo de nuestra Carta Magna se dice infringido, porque en él se consagran los Principios sociales, políticos, económicos y morales inspiradores de la Revolución Panameña; y siendo que la Nación es un concepto que se resuelve como un pueblo con identidad propia, unido por vínculos culturales, históricos, lingüísticos y religiosos, las autoridades públicas no pueden variar por simples conveniencias mercantilistas las formas de celebrar las efemérides patrias, y las fechas de contenido espiritual.

Examen de constitucionalidad.

Iniciamos nuestro análisis con el artículo 19 de la Constitución Política; norma ésta que se dice vulnerada por el demandante.

Tengamos en cuenta que el artículo 19 es el que establece y garantiza una situación homogénea para todos los ciudadanos, en su condición como persona, al prohibir los fueros o privilegios personales entre unos y otros, así como los distinguos por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Así lo ha externado la Corte Suprema de Justicia, en la siguiente resolución judicial:

¿Al concretar ahora el análisis a la interpretación del artículo que se comenta, resulta evidente que dicho precepto no sólo prohíbe los fueros o privilegios personales, sino, además, la discriminación por razón de raza, nacimiento, sexo, religión o ideas políticas. Pero a pesar de que (sic) dicha norma contiene esas prohibiciones, la interpretación dominante hasta ahora ha sido la que la primera de ellas, o sea los fueros o privilegios personales, son aquellos que se fundan en la raza, el nacimiento, la clase social, el sexo, la religión o las ideas políticas restringiendo o limitando todo el articulado a la existencia de esas circunstancias...¿ (Sentencia de 17 de abril de 1985).

Si bien ésto no debe entenderse como las únicas causas por las que pueden darse situaciones de discriminación, sí parecen ser las más comunes.

Así lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, y la Corte Suprema de Justicia se ha hecho eco de este criterio, en los siguientes términos:

¿La Corte por las razones expuestas por el Procurador de la Administración, considera necesario aclarar que los fueros o privilegios personales que prohíbe el artículo 19 de la Constitución, son justamente aquellas situaciones odiosas e injustificadas de ventajas exclusivas para un grupo de personas o personas determinadas, las cuales necesariamente no tienen por qué fundarse en la raza, el nacimiento, la clase social, el sexo, la religión o las ideas políticas.

Dicho precepto ciertamente prohíbe la discriminación por razón de esas condiciones personales, es decir, de tipo personal que al ser sancionadas por la ley crean una posición desigual, y por demás injusta, pero en beneficio y provecho exclusivo para un grupo de personas o persona determinada, generalmente motivada por razones personales injustificadas.¿ (Las negrillas son nuestras) (Sentencia de 17 de abril de 1985, Carlos Iván Zúñiga versus los artículos 1,2 y 3 de la Ley N°45 de 14 de noviembre de 1984).

Aunado a lo anterior, es necesario precisar que la situación homogénea que pretende establecer el artículo 19, no puede ser idéntica en todas las circunstancias, porque hay elementos intrínsecos en cada una de ellas que crean o generan situaciones diferentes, que pudieran parecer beneficiosas en un momento dado, para un sector de la comunidad, y que pudieran traducirse como un fuero o un privilegio, en detrimento de otras.

El Doctor César Quintero, en su obra Derecho Constitucional Tomo I, analiza el concepto etimológico de la palabra fuero, y nos explica que el mismo proviene del vocablo latino forum, que significa tribunal, al que le siguió una tradición netamente hispánica; sin que tuviera una equivalencia exacta, ni el término similar --de la misma raíz-- en otro idioma.

Agrega que en el español, la palabra fuero tampoco posee un único significado o acepción, habida cuenta que la palabra fuero puede implicar una idea de jurisdicción; cuerpo de leyes, verbigracia, el Fuero del trabajo; un estatuto, como el Fuero Municipal o Universitario; una garantía, ejemplo, los fueros ciudadanos; un derecho, así como un status especial, prerrogativa y privilegio.

El fuero, per se, no implica una exclusividad o un injusto; ya que ello depende de la naturaleza del fuero. Hay fueros que son constitucionales y legales, como las garantías individuales, las prerrogativas de los diputados, así como la inviolabilidad de las universidades y los templos.

Los fueros o privilegios a los que se refiere el artículo 19 constitucional, guardan relación con las situaciones inadmisibles e intolerables, que crean situaciones injustas de favor y de exención de determinadas personas o grupo de ellas, por razón de las condiciones o distingos que en ella se detallan.

Nuestra Carta Magna equipara los términos fueros y privilegios; sin embargo, el último es más restrictivo que el anterior, por cuanto proviene de la voz latina privilegium y éste, a su vez, de privus (privado) y lege (ley), de los que se obtiene el significado: ley privada. Y es que --ciertamente-- el privilegio se origina de una Ley que crea cierta ventaja exclusiva para un sector privado o particular; o personal, cuando se emite una ley de excepción para una persona o para un grupo social, por razones netamente ajustadas a la persona.

Este último, es el privilegio que nuestra Constitución Política prohíbe, el de tipo personal, ligado íntimamente a los distingos, por razón de la raza, de nacimiento, de clase social, de sexo, de religión o de ideas políticas.

Bajo el amparo de la Constitución Nacional de 1946, la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, emitió un número plural de Sentencias en las que sostuvo que los fueros o privilegios personales que prohibía el entonces artículo 21 constitucional, debían tener como base la raza, de nacimiento, la clase social, el sexo, la religión o las ideas políticas.

Con posterioridad, nuestro Máximo Tribunal de Justicia observó que podían existir fueros o privilegios, incluso por razones personales, que no tenían como fundamento las condiciones personales allí enumeradas.

El Control Constitucional en ese sentido, se extendió más allá de los textos legales, recayendo sobre los reglamentarios, que contuvieran situaciones o condiciones prohibidas por el Estatuto Fundamental.

En el caso que nos ocupa, el Control Constitucional recae sobre el Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997, que modifica el artículo 46 del Decreto de Gabinete N°252 de 30 de diciembre de 1971 (Código de Trabajo); sin embargo, este Despacho observa que los fueros, privilegios o discriminaciones a las que se refiere el artículo 19 de nuestra Carta Magna, no fueron elementos que se consideraron para la introducción de las reformas al artículo 46 del Decreto de Gabinete N°252 de 30 de diciembre de 1971.

Basamos nuestra afirmación, en el hecho que las modificaciones, en referencia, tienen como tónica o fin primordial que los días de descanso obligatorio, por razón de las efemérides patrias, duelo nacional, fiesta nacional, celebración religiosa o cívica, correspondientes a los días 9 de enero, 1° de mayo, 10 de noviembre, 28 de noviembre y 8 de diciembre coincidan con un lunes, para garantizar --efectivamente-- el festejo de tan significativas fechas, aunado al descanso corporal que dispone la norma (artículo 46 del Código de Trabajo); especialmente en el interior de la República.

Nótese que el artículo 46 del Código de Trabajo, pertenece al Capítulo IV, que se denomina Descansos Obligatorios, concretamente, a la Sección Segunda identificada como Descanso Semanal y en Día de Fiesta o Duelo Nacional.

En dicha Sección, el artículo 40 de la codificación laboral, dispone que el descanso semanal es un derecho y un deber; y que el mismo, debe darse --de preferencia-- los domingos, al tenor de lo señalado en el artículo 41.

Sin embargo, ello tiene su excepción, cuando se trata de alguno de los supuestos de los que se contemplan en el artículo 42; supuestos éstos en los que puede pactarse un día distinto, a cambio del descanso dominical.

El artículo 42, a su vez, indica que las empresas y establecimientos permanecerán cerrados los días domingo y los días de fiesta nacional; detallándose --en el artículo 46-- cuáles son los días de descanso obligatorio por fiesta o duelo nacional.

Por consiguiente, el Órgano Ejecutivo, al introducirle modificaciones al artículo 46 del Código de Trabajo, lo que hizo fue trasladar el día de descanso obligatorio a un lunes; haciendo los ajustes pertinentes, dependiendo del día de la semana en el que se celebre la efeméride patria, el duelo nacional, la fiesta nacional, la celebración religiosa o cívica, según se indica en el texto reformativo del artículo 46, in examine.

El descanso obligatorio, en ningún momento pretende ser un fuero o un privilegio a favor de los servidores públicos, en detrimento de los trabajadores del sector privado, porque en ambos casos lo que se desea es garantizar que el día de descanso (por la celebración de las efemérides patrias, el duelo nacional, la fiesta nacional, la celebración religiosa o cívica, que se trate), se una al descanso semanal del que gozan ambos sectores habitualmente.

En efecto, el descanso semanal para los trabajadores del sector privado es el día domingo; mientras que para los servidores públicos el mismo recae en los días sábado y domingo.

El hecho de anexarle o añadirle el descanso obligatorio, al descanso semanal, no implica la existencia de un fuero o privilegio, a favor de unos (los del sector público), en detrimento de otros (los del sector privado); precisamente porque --para ambos casos-- el descanso obligatorio es de un día; lo que denota homogeneidad para los dos sectores productivos de la sociedad; lo que se traduce como una ausencia de fuero o privilegio.

En un análisis estricto del artículo 19 de la Constitución Política, vemos que las modificaciones al artículo 46 del Código de Trabajo, no introdujeron distingos por razón de raza, porque no se tomó en cuenta el color de la piel de los trabajadores ni de

los servidores públicos, para determinar el descanso obligatorio; tampoco fue por el nacimiento de los sectores productivos de la sociedad, porque no se tomó en cuenta el lugar geográfico de su nacimiento; la clase social no fue el elemento determinante de las reformas, porque no se tomó en consideración ningún grupo privilegiado o de abolengo, para tal fin; el sexo, tampoco fue utilizado como fundamento, porque no fue la calidad humana de hombre o mujer la que determinó que el descanso obligatorio se ubicara en un día lunes; así como no lo fue el grupo religioso al que pertenecen los trabajadores o los servidores públicos; ni los ideales políticos que abrigan unos u otros; sino el deseo de garantizar la efectiva celebración de las fechas discernidas en nuestro estudio, el reposo corporal contemplado en la ley codificada, además de un evidente incentivo turístico nacional.

Siendo así, este Despacho arriba a la conclusión que no existe incongruencia entre el precepto constitucional (artículo 19 de la Constitución Política), y el Decreto Ley No. 8 de 2 de julio de 1997, tachado de inconstitucional, porque --como se ha visto-- no se han identificado fueros, privilegios, ni discriminaciones personales, al trasladar el descanso obligatorio a un día lunes.

Avanzando en nuestro análisis, nos corresponde --ahora-- estudiar el artículo 20 de la Carta Magna, que contiene el Principio de Igualdad ante la Ley de panameños y extranjeros, lo que significa que ninguna categoría o grupo de habitantes de un Estado debe ni puede tener más derechos que otros, claro está, salvo las limitaciones que establezca la naturaleza de la relación, la Ley o la propia norma constitucional, por razones de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional.

Nuestro ilustre constitucionalista y ex-Magistrado de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte, Dr. César Quintero, señala que, según la Constitución de 1946, los extranjeros tenían los mismos derechos que los nacionales ante la ley, de allí que podían --incluso-- ejercer los derechos políticos; sin embargo, en la práctica, ello nunca ocurrió.

Con respecto a la interpretación del artículo 20 de nuestra Constitución Política, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se ha expresado así:

¿Para entender el problema constitucional planteado es necesario considerar que la prohibición de fueros o privilegios personales que consagra el artículo 19 de la Constitución es consecuencia o derivación lógica del principio de igualdad ante la ley que recoge el siguiente artículo (20) de la Carta Magna.

El principio de igualdad ante la ley, en su acepción objetiva, condiciona todo nuestro ordenamiento e implica una aplicación uniforme de la ley ante supuestos fácticos iguales o semejantes. Desde la óptica subjetiva se traduce en la prohibición de los tratos desfavorables, fueros y privilegios odiosos que fueran entronizadas en el pasado. Por ello, no se puede tomar como correcto el análisis interpretativo del catálogo cerrado que prohíbe, tan sólo, los privilegios personales o las discriminaciones por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Se impone una visión dialéctica, integradora, dirigida a reforzar, sin distinción, la igualdad jurídica de todos los que se encuentren bajo la jurisdicción e imperio de la ley nacional, respetando obviamente las excepciones que impone la ley y el hecho cierto de que (sic) para igualar a los desiguales procede tratar de manera razonablemente distinta a los más débiles.¿ (Sentencia de 3 de enero de 1994. Registro Judicial de enero de 1994, pág. 67).

El aspecto más relevante de la jurisprudencia citada, es la aplicación uniforme de la ley a panameños y extranjeros, ante supuestos fácticos iguales o semejantes, acorde a

la visión dialéctica; salvo las excepciones naturales que limiten el ejercicio de algún derecho o aquéllas que establezca la Ley.

En abono a lo anterior, es necesario precisar que la igualdad no es universal; ya que ¿incluso, en lo que a los propios panameños respecta, no todos tienen ni pueden tener exactamente los mismos derechos.¿ (Quintero, César. Derecho Constitucional. Imprenta, Librería y Litografía LEHMANN, Panamá, 1967, pág. 138).

El Doctor Quintero --al hacer esa afirmación-- explica que los nacionales no pueden ejercer todos sus derechos de igual forma, y pone por ejemplo la limitante de la edad, que impide a los menores ejercer los derechos políticos o a los analfabetos ocupar ciertos cargos públicos.

A nuestro modo de ver, al artículo 20 de la Constitución Política tradicionalmente se le han dado dos interpretaciones; la primera que coloca a los nacionales y a los extranjeros en el mismo plano de igualdad, salvo las excepciones que surjan por la propia naturaleza de la relación, por disponerlo así la Ley o por mandato constitucional.

Esta interpretación se origina por razón de la conjunción copulativa ¿y¿ que contiene el artículo 20 constitucional, cuando dice: ¿Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley...¿; ello implica una unión de conceptos, por el nexo que surge de la conjunción, misma que se utiliza para unir dos palabras u oraciones.

La segunda, es aquélla que consolida la igualdad entre los nacionales como colectivo, y de los extranjeros, también visualizados como conjunto.

De allí que esta última interpretación es la que da pie para que los ciudadanos que utilizan el Recurso de Inconstitucionalidad, se fundamenten en el artículo 20 de la Carta Magna, cuando encuentren diferencias en la aplicación de la Ley entre los nacionales, únicamente.

En la situación bajo análisis, el demandante se ampara bajo esta última premisa, porque --según él-- no se da una igualdad entre los nacionales: entendiéndose por ello, los trabajadores del sector privado, y los servidores públicos del sector público; ya que --a su juicio-- no se le concede igual período para el disfrute del ¿puente turístico¿.

Este Despacho se opone a tal planteamiento, reiterando los argumentos que esbozamos en el aparte anterior, en el sentido que la jornada laboral para el sector privado es distinta a la del sector público, porque la primera se inicia el lunes y culmina el sábado; mientras que la segunda comienza el lunes y termina el viernes.

Las reformas introducidas al artículo 46 del Código de Trabajo, en modo alguno modifica dicha situación; ya que se limita a anexar al descanso semanal de los trabajadores que es el domingo, y de los servidores públicos, que es el sábado y el domingo, el día de descanso obligatorio, trasladándolo para el día lunes, de forma tal que haya continuidad en el descanso corporal.

No se evidencia, por tanto, ninguna desigualdad entre uno y otro sector, porque a ambos se le concede la misma prerrogativa de unir su descanso semanal al descanso obligatorio, por lo que no se produce la infracción del artículo 20 de nuestro Estatuto Fundamental.

La tercera norma que se presume infringida, es el artículo 77 de la Carta Magna, contenido de nuestros principios culturales los que están conformadas por nuestras manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas, producidas por el hombre en Panamá, a través de las épocas. Ligado a ello se dispone la obligación estatal de promover, desarrollar y custodiar este patrimonio cultural.

El demandante plantea que no se le ha dado la importancia que revisten los días de fiestas patrióticas, de fiesta nacional, religiosa o cívica, que tienen las fechas mencionadas en el artículo 46 del Código de Trabajo.

No compartimos el criterio esgrimido, porque el traslado de las fechas al día lunes, no implica el desconocimiento de la importancia que revisten los días: 9 de enero, 1º de mayo, 10 de noviembre y 28 de noviembre, porque el Estado --a través del Ministerio de Educación-- continúa organizando los desfiles patrios, alusivos a las efemérides patrias; de igual forma el Órgano Ejecutivo rinde homenaje a los Mártires del 9 de enero, como forma de recordar los hechos acaecidos; y lo mismo ocurre con el primero de mayo, en el que el Jefe de la Cartera laboral envía mensajes a los trabajadores en su día.

Lo anterior, garantiza la obligación del Estado de promover, desarrollar y custodiar el patrimonio cultural de nuestra nación; destacando nuestras raíces históricas, tradiciones y costumbres.

El día 8 de diciembre constituye una celebración de carácter religioso, que el Estado respeta, pero que atañe a la Iglesia Católica su celebración.

En esa fecha se conmemora el día de la Inmaculada Concepción, y es ese día en que se festeja a las madres panameñas; independientemente que el descanso obligatorio sea trasladado a otro día de la semana; en este caso, el lunes.

Bajo esa óptica, no visualizamos infracción alguna al precepto constitucional, por parte del Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997.

Otras norma que se consideran vulneradas, son los artículos 87 y 89 del Estatuto Fundamental que atañen a la Educación.

El demandante considera que el disponer una forma de celebración de fechas patrióticas, como la señalada en el Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997, es contraria al querer del constituyente, porque según su criterio, la educación se basa, en la afirmación y fortalecimiento de la Nación Panameña como comunidad cultural y política.

Somos del criterio que los artículos 87 y 89 de la Constitución Política; el primero, que fundamenta la educación --entre otras cosas-- en la afirmación y fortalecimiento de la Nación panameña, como comunidad cultural y política); y el segundo, que define la finalidad de la educación panameña, como el fomento en el estudiante de una conciencia nacional, basada en el conocimiento de la historia y los problemas de la patria, va ligado al concepto de Cultura, que ya analizamos, por lo que deben aplicarse los mismos criterios y parámetros que empleamos para puntualizar la constitucionalidad del Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997, en ese sentido; habida cuenta que no hay un desconocimiento, por parte del Estado, de los elementos que cimientan la Educación y la Cultura; máxime cuando se cumple a cabalidad con la obligación estatal de fomentar actividades tendientes a perpetuar en los nacionales, especialmente los estudiantes, nuestra identidad como patria, a través de la celebración de las efemérides del mes de noviembre, los actos conmemorativos del 9 de enero y del primero de mayo; respetando las alusivas al día de las Madres panameñas, que --como ya indicamos-- compete a la Iglesia Católica su celebración, lo que nos lleva a la indubitable conclusión que el Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997, no vulnera el artículo 87 de la Carta Política.

Finalmente, se considera vulnerado el Preámbulo de la Constitución Política, en relación con el artículo primero de la misma, porque el demandante considera que el Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997, no recoge los principios sociales, políticos, económicos y morales inspiradores de la Revolución Panameña; traducido como el concepto de Nación que recoge la identidad propia de un pueblo, unido a sus vínculos culturales, históricos, lingüísticos y religiosos; y --añade-- que las autoridades no pueden variar, por simples conveniencias mercantilistas, las formas de celebrar las efemérides patrias.

Diferimos del criterio externado por el demandante, porque la misma fuerza inspiradora que motivó a nuestros Constitucionalistas a crear nuestro Estatuto Fundamental, es la misma que impulsó a las autoridades estatales, a introducir las reformas (en referencia) al artículo 46 del Código de Trabajo, fundamentados en la búsqueda de la solución a los graves problemas que --actualmente-- aquejan a la población del interior del país, los cuales están afectados por los desórdenes climatológicos, por todos conocidos, que han traído como consecuencia fuertes sequías, que han repercutido negativamente en el sistema de cultivo de nuestros campesinos, y que únicamente con el recurso que podemos aportar los ciudadanos de las provincias más aventajadas (económicamente hablando), es como se puede iniciar un proceso orientado a apalejar la pobreza extrema en la que se encuentran los conciudadanos interioranos.

No se trata, por tanto, de egoístas motivos mercantilistas, sino de reales medidas tendientes a solucionar problemáticas sociales, que afectan directa e indirectamente a toda la población.

Y ello no se ha ideado e implementado en detrimento de las fiestas nacionales, festividades patrias, cívicas y religiosas; ya que ninguna de las fechas descritas en el artículo 46 del Código de Trabajo, han dejado de celebrarse en la forma como tradicional y consuetudinariamente se han venido haciendo; y mucho menos, vulnerando los preceptos constitucionales o faltando a la obligación estatal consignada en nuestro Estatuto Fundamental.

Por todo lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Señores Magistrados, se sirvan declarar la constitucionalidad del Decreto Ley N°8 de 2 de julio de 1997, por no ser violatorio de los artículos 19, 20, 77, 87, 89, el Preámbulo, ni algún otro artículo de la Constitución Política.

Del Señor Magistrado Presidente,

Licda. Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración

AMdeF/5/mcs.

Licdo. Víctor L. Benavides P.
Secretario General